

Apuntes sobre el movimiento de trabajadores desocupados en el norte de Salta y la autogestión.

José Daniel Benclowicz.

Cita:

José Daniel Benclowicz (2007). *Apuntes sobre el movimiento de trabajadores desocupados en el norte de Salta y la autogestión. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-106/169>

Apuntes sobre el movimiento de trabajadores desocupados en el norte de Salta y la autogestión

José Daniel Benclowicz

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.

jd.benclowicz@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El aumento de la desocupación a nivel mundial durante las últimas décadas ha provocado la disolución de marcos de referencia que resultaban centrales para muchos trabajadores, tendiendo en general a una creciente descolectivización de la sociedad (Castel 1997). En la Argentina, como consecuencia de las políticas neoliberales instrumentadas por el gobierno de Carlos S. Menem y continuadas por su sucesor, Fernando de la Rúa, se produjo un vertiginoso crecimiento del desempleo, que no tiene precedentes en la historia del país. Sin embargo, la emergencia de un movimiento de trabajadores desocupados, como es el caso del movimiento piquetero, expresa una tendencia contraria a la disgregación social. Los piqueteros lograron redefinir en términos positivos su condición de desempleados, proyectándose al plano de la lucha colectiva y configurando nuevas identidades y agrupamientos.

Las localidades de Tartagal y General Mosconi, ubicadas al norte de la provincia de Salta, se vieron particularmente afectadas por el proceso de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que tenía una fuerte presencia en la zona. La venta de la empresa estatal provocó por un lado, una completa desestructuración económica y social, y por el otro, una profunda crisis de identidad en el seno de la clase obrera de la zona. Esta crisis se vio acentuada por la prescindencia del sindicato del sector, que tras una fugaz oposición colaboró abiertamente con la venta de YPF. En ese marco, algunos años después, los piqueteros protagonizaron importantes experiencias de lucha y de organización política y económica alternativas, probablemente las más radicalizadas desde el restablecimiento de la democracia en 1983. Este trabajo se propone analizar el surgimiento y desarrollo de las experiencias de autogestión de recursos en las agrupaciones piqueteras más destacadas de la zona por su extensión e influencia: la UTD (Unión de Trabajadores Desocupados) de Mosconi y a la CTD-PO (Coordinadora de Trabajadores Desocupados-Polo Obrero) de Tartagal.

Como es sabido, desde 1997 los trabajadores desocupados organizaron diversas protestas, utilizando el corte de ruta y de acceso a las empresas petroleras como uno de sus principales métodos de lucha. En numerosas

oportunidades, los cortes fueron reprimidos por orden de las autoridades. En ese contexto, los piqueteros impulsaron y encabezaron formas de democracia directa que desplazaron al poder político local, transfiriendo el poder de decisión y acción a asambleas populares en las que participó el conjunto de la comunidad. Esas puebladas obligaron a los representantes del Estado a retirar a las fuerzas represivas y a acceder a buena parte de las demandas de los manifestantes (Benclowicz 2005, 2006). Como consecuencia de sus luchas, la UTD y la CTD-PO lograron controlar diversos recursos, a partir de los cuales implementaron distintas modalidades de autogestión. Por otra parte, las estructuras sindicales locales tradicionales se vieron avasalladas por las organizaciones piqueteras, que se convirtieron por momentos en el eje de referencia del conjunto de los trabajadores.

Las experiencias de Tartagal y de Mosconi influyeron fuertemente en la conformación del movimiento piquetero en todo el país. La UTD de Mosconi terminó estructurándose como una organización autónoma, y se convirtió en una importante referencia de este tipo de organizaciones en todo el país (MTD Solano y Colectivo Situaciones 2002). La CTD, por su parte, sirvió de experiencia inicial al Polo Obrero, organización piquetera de alcance nacional orientada por el Partido Obrero –de tendencia trotskista–. Se espera que el análisis de la autogestión en el movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi contribuya a la identificación de aportes y limitaciones de las organizaciones de trabajadores desocupados para la articulación de alternativas económicas y sociales al orden imperante.

EL SURGIMIENTO DE LA UTD DE MOSCONI

Expulsados del circuito productivo y de sus antiguas organizaciones sindicales, algunos trabajadores desocupados procuraron en un comienzo aglutinarse en función de la defensa de sus intereses particulares, tendiendo de esta manera a una reconfiguración de las identidades y de los lazos sociales que habían sido destruidos. De ese modo, en 1996, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi (UTD) dio sus primeros pasos. Apenas se organizaron, los trabajadores desocupados de la UTD buscaron determinar cuantos trabajadores de Mosconi se encontraban en su misma situación, para iniciar gestiones ante el poder político. Se trata, en un inicio, de la conformación de una agrupación de carácter gremial, que apunta a representar a los trabajadores desocupados ante el Estado. Al igual que los primeros sindicatos, la UTD nació en un marco de lucha contra el Estado: “En el ’96 ya una vez que estábamos constituidos, tomamos el Concejo, ocho personas de Mosconi, 23 días, lo transformamos a ese Concejo en un comedor para niños y ancianos... Y por lo menos la comida la tenían asegurada y bueno, a partir de ahí se fueron enterando, mucha gente que se solidarizaba, porque estábamos nosotros adentro del Concejo [...] Entonces, logramos que el gobierno reconozca que hay desocupación. Y empezaron a gestarse algunos planes, algunas cosas para la gente, algunos comedores”

(Miembro fundador de la UTD, entrevista de agosto de 2000, en Lapegna, 2000: 46- 47).

La radicalidad de la medida y la capacidad de organización evidencian una amplia experiencia de lucha, que tiene al corte de 1991 como uno de sus antecedentes. Este tipo iniciativas exceden las prácticas del sindicalismo peronista tradicional, de donde proviene la mayoría de los trabajadores argentinos, incluidos los de YPF. En efecto, uno de los fundadores y principales dirigentes de la UTD hasta el año 2000 fue Juan Nievas, ex-ypefeño vinculado originalmente al PC (Partido Comunista) y luego a la CCC y al PCR (Corriente Clasista y Combativa – Partido Comunista Revolucionario). El discurso neoliberal que había sido aceptado por los referentes sindicales peronistas y buena parte de la población empezaba a ser rechazado cada vez por más sectores, que registraban su carácter ilusorio en plano de la experiencia: las posibilidades de obtener un trabajo estable como el que tenían se habían esfumado, sus condiciones de vida –y las de sus familias– habían empeorado drásticamente. Esa percepción, sumada a la intervención de actores políticos y sindicales de izquierda favoreció el desarrollo de prácticas de lucha alternativas basadas en la acción directa, que arrojaron muy buenos resultados para los manifestantes. En el caso de la toma del Concejo Deliberante, el gobierno debió reconocer a la UTD como interlocutor válido y otorgar ayuda social para descomprimir la situación. A su vez, la UTD se fortaleció doblemente por el reconocimiento de las autoridades y la solidaridad y la participación activa de la población, duramente golpeada por la desocupación; ese hecho permitió sostener la ocupación por 23 días. Todo este proceso aportó elementos para la realización del primer gran corte-pueblada de la zona, en mayo de 1997.

LOS PRIMEROS CORTES-PUEBLADAS Y SUS CONSECUENCIAS

Una de las características más importantes que aparecen en torno a los primeros cortes de ruta-puebladas entre 1997 y 2000 es que el sistema representativo fue puesto en cuestión por las asambleas masivas realizadas en la ruta. Estas instancias de deliberación popular se asumieron soberanas en la práctica, desconociendo a los representantes municipales electos mediante el sufragio. Los delegados que se fueron eligiendo a los efectos de dialogar con los gobiernos nacional y provincial eran revocables, y debían someter las propuestas de las autoridades a la consideración de las asambleas, que podían aceptarlas o rechazarlas.

Tras la finalización de cada medida de protesta el orden político fue restablecido: los poderes ejecutivos y legislativos de los municipios de Tartagal y Mosconi fueron varias veces intervenidos por la provincia, que designaron nuevas autoridades. Sin embargo, es posible pensar que los acontecimientos producidos fueron dejando una huella en la memoria colectiva de sus habitantes, en particular de los trabajadores desocupados que participaron de la protesta,

que aprovecharon la experiencia para avanzar en su organización; las redes sociales que surgieron o se fortalecieron tras el corte-pueblada de 1997 no fueron desactivadas. La UTD se fortaleció y continuó su lucha por la obtención de puestos de trabajo estable, utilizando el recurso del corte de ruta y el corte de acceso a las empresas petroleras, logrando en algunos casos la incorporación de personal.¹

En un contexto signado por el enfrentamiento creciente con las autoridades y el funcionamiento de mecanismos asamblearios, los manifestantes rechazaron el orden legal instituido en la medida en que percibían que respondía a intereses incompatibles con los suyos propios; en esta línea, visualizaron al Estado como el representante de intereses particulares.² Parte de esta visualización se expresó en la exigencia de la renuncia de las autoridades locales. Otra parte, en la búsqueda de control de los recursos que les eran negados antes de las protestas y después, por el incumplimiento de los acuerdos o la corrupción de los gobiernos nacional, provincial y municipales.

Así, tras el levantamiento del corte de octubre de 1999, el movimiento piquetero conservó un rol activo, organizando la entrega de alimentos y de los planes Trabajar. El diario *El Tribuno* refleja ese hecho con claridad: “La entrega [de los alimentos] estuvo a cargo de Dora Velázquez (plan "Trabajar" de Tartagal) y Juan Carlos González (representante de los desocupados de Tartagal), junto a Juan Nieva y Juan Carlos Ramírez, representantes de los ‘trabajadores desocupados’ de General Mosconi. El control de las entregas estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, cuyos efectivos acompañaron a los responsables elegidos en las visitas a los barrios de General Mosconi y Tartagal. [...] Las entregas se harán sobre la base del relevamiento –que incluye a aborígenes– realizado por los representantes de los ex-manifestantes. [...] Para hoy, en tanto, se espera la llegada de la primera comisión del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus miembros, junto a representantes de Tartagal y Mosconi, tendrán a su cargo el seguimiento y distribución de los planes ‘Trabajar’ en el futuro. Para ello fueron electos nueve representantes de Tartagal y seis de Mosconi”. (*El Tribuno*, 27/12/1999, “La Nación entregó ayuda alimentaria en el Norte”)

A partir del fragmento citado, surgen elementos de gran importancia para el análisis. En primer lugar, es de destacar que la relación tradicional entre el gobierno y los representados aparece invertida: los delegados elegidos por los piqueteros en Asamblea son los que están a cargo de las entregas, los agentes estatales –en este caso, la gendarmería– ejercen una función de contralor. Al mismo tiempo, la determinación de quiénes serán los que recibirán la ayuda alimentaria, corre por cuenta de los piqueteros. Por su parte, la distribución de los planes se proyecta a través de una gestión compartida. A partir de esto es posible pensar que el movimiento de desocupados y los mecanismos de autogestión desplazaron en ese momento al Estado en algunas de sus funciones, y que los trabajadores desocupados fueron visualizados como un eje de referencia de parte de la comunidad. Las iniciativas de lucha, la participación

popular, y el propio carácter del reclamo de trabajo estable, principal reivindicación levantada por los piqueteros de Tartagal-Mosconi,³ favoreció ese desarrollo, que tendió a profundizarse: tras el levantamiento del corte-pueblada de mayo de 2000, el Estado ni siquiera figuró como partícipe en la distribución de la ayuda social, que según lo acordado quedó a cargo de la Iglesia católica y representantes piqueteros.

DESARROLLO DE LA AUTOGESTIÓN

A partir de la pueblada de mayo de 2000, el movimiento de trabajadores desocupados de Tartagal-Mosconi entró en una nueva etapa. En Tartagal, algunos días después del corte se conformó la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), liderada por Pepe Barraza, del Partido Obrero. Pepe Barraza contaba con una amplia experiencia como trabajador estatal y militante sindical y político. Por otro lado, la UTD se consolidó como la organización de desocupados más importante de la zona, y Pepino Fernández se afirmó como su principal dirigente.⁴

En el año 2000, ambas agrupaciones comenzaron a manejar directamente gran cantidad de planes Trabajar, evitando de este modo el manejo clientelístico característico del poder político. Para asumir el control de los planes, debieron presentar proyectos “comunitarios” o “productivos” en el marco de los cuales se desarrolla la “contraprestación laboral” a la que están obligados los beneficiarios según la reglamentación vigente. A partir de estos proyectos, desde el año 2000 hasta la actualidad, la UTD y la CTD-PO han desarrollado un conjunto de actividades vinculadas a las necesidades de la comunidad. La experiencia de haber sufrido y derrotado la represión, y la de hacerse cargo de administrar la ayuda social que garantizaba los medios de vida elementales a buena parte de la población, consolidaron al movimiento y lo legitimaron aún más ante la comunidad.

La persistencia de los elevados índices de desempleo –que de acuerdo a las estimaciones de los respectivos municipios son del 60% en Mosconi (Municipalidad de Mosconi, 2005), y del 50% en Tartagal (Municipalidad de Tartagal, 2004)–, en un contexto en el que se habían puesto en pie organizaciones de lucha representativas e independientes de los sectores del poder, actuó como una usina que multiplicaba la influencia de un movimiento de trabajadores desocupados, que no se limitaba a gestionar planes sociales. Tras el corte de mayo de 2000 –y hasta la actualidad–, la UTD y la CTD-PO comenzaron a movilizarse sistemáticamente a las sedes de las empresas petroleras, organizando cortes de acceso para exigir la contratación de desocupados y reclamar aumentos de salarios, con notable éxito. Hacia el año 2000, por ejemplo, varias petroleras aplicaban el convenio de la UOCRA –el gremio de la construcción–, que era de 0,95 pesos la hora, significativamente inferior al petrolero, de 2,50 pesos la hora. La acción conjunta de los piqueteros

de Mosconi, Tartagal y Pocitos logró imponer un convenio “piquetero” de 2,50 pesos para los trabajadores que fueron contratados a raíz de esa lucha.

En función de esa práctica, se produce una situación inédita en el mecanismo habitual de la relación capital-trabajo: no son los capitalistas quienes seleccionan a los asalariados, sino que son las organizaciones de trabajadores desocupados las que imponen las nóminas de personal. Este hecho favorece a su vez la solidaridad de los contratados con los que están esperando para emplearse en a las empresas, ya que son las mismas organizaciones que los ayudaron a ingresar, las que luchan para incorporar nuevos trabajadores. Como en la casi totalidad de los casos se trata de trabajos temporarios, la dinámica se reproduce cíclicamente. El marco legal favorece a las empresas, que no tienen obligación de efectivizar al personal, pero deben negociar con las agrupaciones piqueteras cada vez que ejecutan un proyecto que demande mano de obra. Dadas estas condiciones, los desocupados organizados asumen funciones sindicales, teniendo en cuenta que negocian los salarios y las condiciones laborales. Los gremios oficiales involucrados –de la construcción y del petróleo–, que han tenido una actitud de subordinación al poder político y económico, fueron notablemente desplazados por los piqueteros.

Por otra parte, en función de la utilización de la metodología del corte de acceso a las empresas, ambas organizaciones obtuvieron distintas herramientas e insumos necesarios para llevar adelante los proyectos comunitarios, ya que el Estado se desentendía de su provisión. La UTD en particular, llegó a asumir ciertas funciones municipales, en la medida en que distintos sectores –directores de escuelas y hospitales, comunidades religiosas, clubes e individuos en general– comenzaron a acercar pedidos de obras, que se realizaban –y se realizan– sobre la base de los planes Trabajar.

Proyectos comunitarios y productivos: un balance provisorio

Dentro de los llamados *proyectos comunitarios*, la UTD desarrolló una labor sin precedentes entre las agrupaciones de trabajadores desocupados, que supera tanto cuantitativa como cualitativamente a las obras ejecutadas por la municipalidad. Entre otras actividades, organizó planes de forestación y desmalezamiento -actividad resulta fundamental para combatir el dengue, enfermedad de carácter endémico en la zona- ; huertas para proveer alimentos a distintos comedores comunitarios y escuelas; y una variada gama de obras de infraestructura, que incluye la erradicación de ranchos y letrinas, construcción de aulas, salones comunitarios, salas de primeros auxilios, comedores e instalaciones recreativas para niños; refacción de escuelas, clubes e iglesias, entre otras. Además, cuenta con un taller de herrería en el que se producen distintos elementos para el uso público, y donde distintos jóvenes tienen la posibilidad de aprender el oficio. Por su parte, la CTD-PO se abocó a poner en funcionamiento comedores populares; merenderos para chicos; cuadrillas de

desmalezamiento en los barrios; huertas para abastecer a los comedores; cuadrillas de construcción de casas; grupos de costureras que fabrican y donan guardapolvos; servicios de corte y enseñanza de peluquería; entre otros proyectos.

Como es sabido, parte de esas actividades estaban a cargo del Estado y fueron abandonadas junto al avance del modelo neoliberal. De esta manera, las organizaciones de desocupados actúan en su reemplazo reconstituyendo la red social. Sin embargo, es necesario señalar que esa acción se despliega en un escenario en el que los sectores dominantes han logrado imponer un retroceso general de las conquistas y del nivel de vida de los trabajadores. Así, muchas de las tareas que actualmente desempeñan los beneficiarios de los planes sociales a cambio de 150 pesos por mes,⁵ anteriormente estaban a cargo de empleados municipales el blanco y con sueldos de convenio. En este sentido, resulta significativo que tanto la UTD como la CTD consideren este tipo de planes como “paliativos”, en el marco de una lucha más general para conquistar puestos de trabajo genuinos.

En consonancia con la orientación del Partido Obrero, la CTD-PO tendió a rechazar los proyectos productivos, por considerar que generan falsas expectativas de ascenso social y pueden separar de la clase obrera a quienes participan de los mismos.⁶ La UTD, en cambio, alentó distintos microemprendimientos: ladrilleras, una compactadora de botellas plásticas y una clasificadora de porotos, entre otras, con la intención de vender la producción y que los trabajadores obtengan un adicional a los 150 pesos del plan. En estos casos, la jornada laboral oscila entre 6 y 8 horas, aunque no siempre se logra colocar la producción y obtener una ganancia. Algunas de estas iniciativas, como la clasificadora de porotos, son aprovechadas por las empresas, que pueden eliminar riesgos y maximizar beneficios recurriendo al trabajo a destajo de los miembros de la UTD.⁷ No obstante, resulta preciso señalar que los referentes de la UTD no consideran a estas iniciativas como una posibilidad de superación del capitalismo, sino como una variable más para conseguir ingresos para los trabajadores. La evolución de esas experiencias estará marcada por la orientación que le impriman los actores y el carácter de los distintos contextos económicos y políticos que se presenten.

BIBLIOGRAFÍA

Benclowicz, José Daniel (2006): “La izquierda y la emergencia del movimiento piquetero en Argentina. Análisis de un caso testigo” (en *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad de la Universidad de Guadalajara*, Vol. XIII, N° 37, Septiembre-Diciembre de 2006).

Benclowicz, José Daniel (2005): “Las “reformas estructurales” y la conformación del movimiento de trabajadores desocupados. Aproximación al caso de Tartagal-

Mosconi” en *Revista de la Escuela de Antropología*, Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Vol. IX, Rosario, noviembre de 2005

Castel, Robert (1997): *La metamorfosis de la cuestión social*, Buenos Aires, Paidós

Gramsci, Antonio (2001): *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Nueva Visión

Lapegna, Pablo (2000) “Actores heterogéneos y nuevas formas de protesta: los cortes de ruta de Tartagal-General Mosconi, Salta”, informe de beca Ubacyt, mimeo

MTD Solano y Colectivo Situaciones (2002): *Hipótesis 891. Más allá de los piquetes*, Buenos Aires, De mano en mano.

Municipalidad de Mosconi (2005): “Plan de desarrollo local y economía social”, mimeo.

Municipalidad de Tartagal (2004): “Plan de desarrollo local y economía social”, mimeo.

¹ Esta última modalidad de lucha se generalizó hacia el año 2000; volveremos sobre este punto más adelante.

² Seguimos en este punto a Gramsci (2001: 58): “El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la expansión del mismo grupo; pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías ‘nacionales’”.

³ Tanto los referentes de la UTD como del Partido Obrero han insistido permanentemente sobre este punto.

⁴ Al igual que Juan Nievas, que por ese entonces se retiró de la UTD, Pepino Fernández fue trabajador de YPF, pero no había militado de manera orgánica. Sin embargo, no era políticamente inocuo: hacia finales de la dictadura, debió dejar Mosconi e instalarse en el sur del país, tras denunciar el uso de fluidos contaminantes por parte de los directivos de YPF.

⁵ En el año 2002, el presidente Eduardo Duhalde impulsó la creación de los planes “Jefas y Jefes de Hogar”, que contemplan una asignación mensual de 150 pesos a cambio de una contraprestación laboral de 4 horas. La mayor parte de los planes vigentes en la actualidad pertenecen a ese programa.

⁶ “P: ¿La CTD no tiene proyectos productivos? R: Prácticamente, salvo algunas excepciones, como el jabón... P: ¿Ustedes están en contra de los proyectos productivos? R: Eeh... Un proyecto en el que los compañeros se autoexploten, [...] tratando de que se tienda a construir y se haga una... una jerarquía vertical... de patrones y todo lo demás, y en el que inclusive los compañeros se sientan separados del resto de la clase obrera y unidos por su emprendimiento comercial sería una aventura que por ahí no nos conviene propiciar... si un grupo de compañeros está interesado en seguirla ¿ta?, porque tienen un proyecto que les interesa, ¿ta? se discute, se ve si es viable...” (Entrevista del autor a militante de la CTD y del Partido Obrero, junio de 2005).

⁷ Schaumberg (2004: 10) señala acertadamente que “Hoy, el dilema para todos los proyectos es visible: no sólo dependen de mano de obra desvalorizada de los planes sino también de la ‘colaboración’ de las empresas transnacionales y de las élites políticas”.